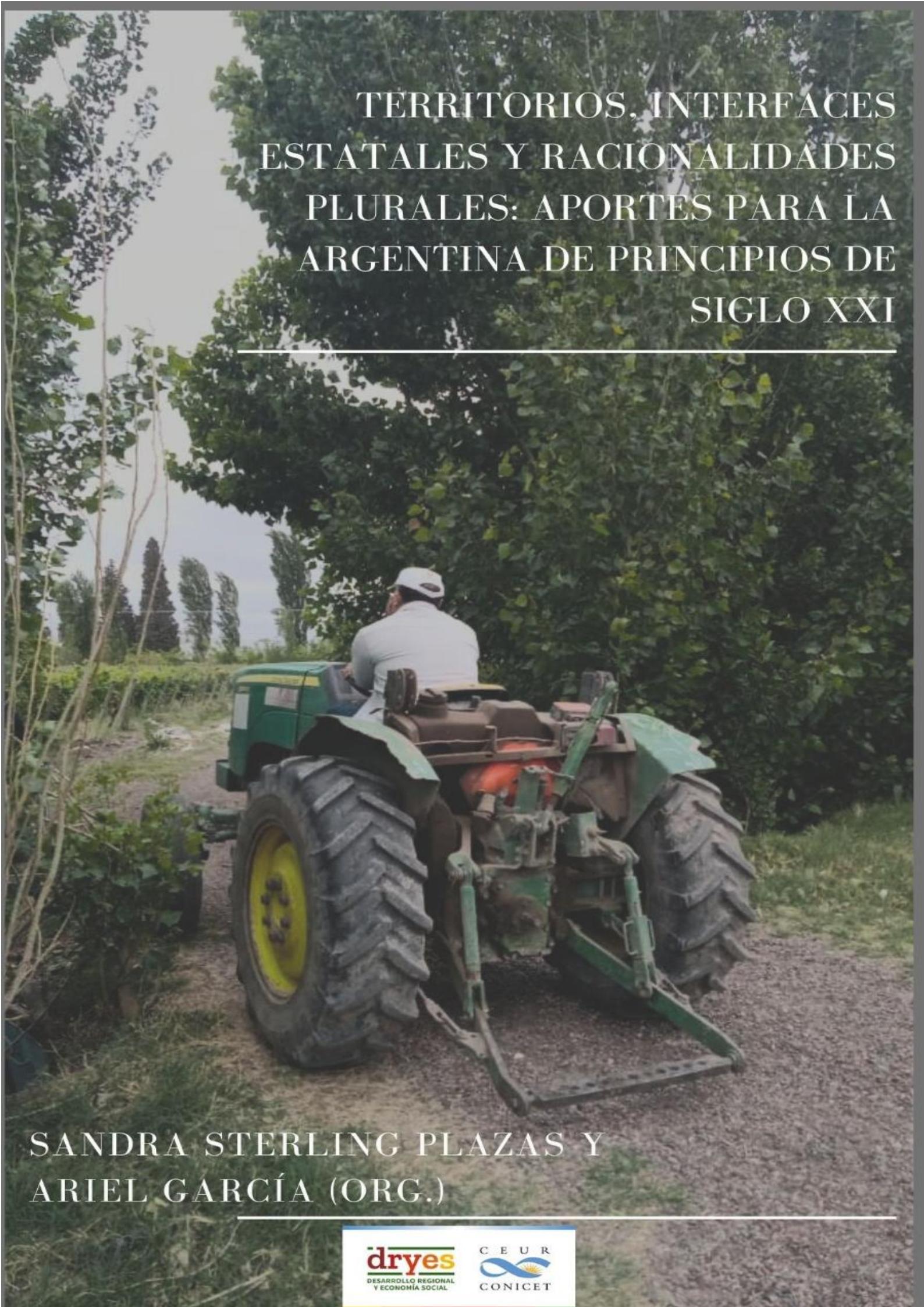


TERRITORIOS, INTERFACES
ESTATALES Y RACIONALIDADES
PLURALES: APORTES PARA LA
ARGENTINA DE PRINCIPIOS DE
SIGLO XXI



SANDRA STERLING PLAZAS Y
ARIEL GARCÍA (ORG.)

TERRITORIOS, INTERFACES
ESTATALES Y
RACIONALIDADES PLURALES:
APORTES PARA LA
ARGENTINA DE PRINCIPIOS
DE SIGLO XXI

Sandra Sterling Plazas
Ariel García
(Org.)

TERRITORIOS, INTERFACES ESTATALES Y RACIONALIDADES PLURALES: APORTES PARA LA ARGENTINA DE PRINCIPIOS DE SIGLO XXI

Organizadores

Sandra Sterling Plazas
Ariel García

Autores y
autoras

Lautaro Alba
Milagros Bordalejo
Carlos Cowan Ros
Malena Victoria Hopp
Aldana García Tarsia
Inés Liliana García
Ariel García
María Florencia Marcos
Ana Natalucci
Paula Cecilia Rosa
Sandra Sterling Plazas

García, Ariel Oscar

Territorios, interfaces estatales y racionalidades plurales : aportes para la Argentina de principios de Siglo XXI / Ariel Oscar García ; Sandra Sterling Plazas ; Inés Liliana García ; Compilación de Sandra Sterling Plazas; Ariel Oscar García. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ines Liliana Garcia, 2024.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-631-00-4261-9

1. Economía Regional. 2. Políticas Públicas. 3. Movimiento Social. I. Sterling Plazas, Sandra II. García, Inés Liliana III. Título.

CDD 306.0982

Corrección de Estilo: Sandra Sterling Plazas y Ariel García

Diseño de interior y tapa: Aldana García Tarsia y Ariel García

Esta obra ha seguido las directrices de revisión de pares, a partir de la evaluación de los siguientes referentes temáticos: Dr. Eduardo Crespo; Dra. Carla Hirt; Dr. Pablo Forni; Dra. Verónica Gago; Dra. Virginia Manzano; Dr. Alexandre Roig; Dra. Cristina Valenzuela.

Se prohíbe la reproducción total o parcial, por cualquier medio electrónico o mecánico incluyendo fotocopias, grabación magnetofónica y cualquier otro sistema de almacenamiento de información, sin autorización escrita del editor.

Con financiamiento de:



Índice

PRÓLOGO. Una perspectiva concebida a partir de la vinculación tecnológica [8]
Ariel García y Sandra Sterling Plazas

PRIMERA PARTE. MARCOS PERSPECTIVA Y HERRAMIENTAS

CAPITULO 1. ¿Cooptación o autonomía? una propuesta de dilucidación a partir de la relectura del enfoque de interfaces [17]
Sandra Sterling Plazas y Ariel García

CAPITULO 2. Cuatro premisas para pensar las relaciones entre los movimientos sociales y el Estado [52]
Ana Natalucci

CAPITULO 3. Apuntes teórico-metodológicos para el abordaje multiescalar de procesos gubernamentales [74]
María Florencia Marcos y Carlos Cowan Ros

SEGUNDA PARTE. EXPERIENCIAS DE INTERFACES EN LOS TERRITORIOS

CAPITULO 4. Movimientos sociales y oportunidades políticas: La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y la conformación de redes para la consolidación [94]
Paula Cecilia Rosa e Inés Liliana García

CAPITULO 5. Territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA) como nueva noción en la agenda pública ambiental en Argentina [114]
Lautaro Alba

CAPITULO 6 . Yerba mate y cooperativismo agrario. La organización cooperativa en la provincia de Misiones	[141]
Milagros Bordalejo	
CAPITULO 7. Entre el “precio justo” y el “precio pagable”: el caso de las Despensas Barriales de la CTA de los Trabajadores	[158]
Aldana García Tarsia	
CAPITULO 8. El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular como lucha por el Estado	[176]
Malena Victoria Hopp	
Participan de esta compilación	[205]

CAPITULO 4

Movimientos sociales y oportunidades políticas: La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y la conformación de redes para la consolidación

Paula Cecilia Rosa

Inés Liliana García

Introducción

Tarrow (1997) considera que el poder de los movimientos sociales se evidencia cuando los ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las élites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales. La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra – UST– es una organización de trabajadores rurales de la provincia de Mendoza que surge en la crisis social, política y económica de 2001 a partir de la articulación entre familias de trabajadores rurales, pequeños productores caprinos y un colectivo de agrónomos y agrónomas recientemente graduados en la Universidad Nacional de Cuyo. Ese año se tornó un hito, para esta organización como para tantas otras, por dar inicio a un proceso organizativo que ya transita más de dos décadas. Lograron el despliegue de estrategias, recursos y alianzas para sostenerse en el tiempo y consolidarse como una experiencia alternativa de producción y comercialización de alimentos en un marco más amplio de impulso hacia la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral.

Específicamente, la UST produce y comercializa diversidad de productos artesanales como licores, vinos y conservas de frutas y verduras de estación. Poseen chacras agroecológicas, impulsan la creación de espacios de intercambio autogestivos a nivel local, provincial y nacional, con puntos propios de comercialización en la provincia y también han desarrollado una Escuela Campesina de Agroecología, así como radios y revistas comunitarias. Como movimiento social han generado una red que se extiende en todo el territorio nacional, junto con otras agrupaciones campesinas, en post de fortalecerse, generar leyes y aportar al diseño de políticas públicas con una mirada estructural del problema en los territorios periféricos, usualmente, en alianza con el Estado Nacional.

En este capítulo se retoma parte de la perspectiva teórica del campo de los movimientos sociales –especialmente las nociones de oportunidades políticas y repertorios de acción– con el fin de adentrarse en las formas en las que actúa la organización. Desde este marco analítico, interesa conocer su conformación, los objetivos que persiguen, sus formas organizativas, las redes que despliegan y las articulaciones que poseen con el Estado Nacional como parte de sus estrategias de consolidación y expansión como movimiento social¹.

Se parte de un análisis de datos primarios (entrevistas en profundidad a referente y parte del grupo originario de la organización analizada) y secundarios (informes de la organización y organizaciones afines, información proveniente de redes sociales y de notas periodísticas de diversidad de medios).

Escenarios de oportunidades

Los movimientos sociales no surgen en cualquier momento ni lugar, lo hacen cuando se producen las oportunidades políticas para la intervención de agentes sociales que normalmente carecen de ellas. Al hablar de estructura de las oportunidades políticas, Tarrow (1997) hace referencia a las dimensiones –aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales– del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva. Con mayor claridad aporta que los cambios más destacados en la estructura de oportunidades surgen de la apertura del acceso al poder, de los cambios en los lineamientos gubernamentales, de la disponibilidad de aliados influyentes y de las divisiones dentro de las élites y entre las mismas. Desde esta perspectiva, las estructuras del Estado crean oportunidades estables, aunque son las oportunidades cambiantes en el seno de los Estados las que ofrecen los canales para que los agentes sociales puedan crear nuevos movimientos. De este modo, la acción colectiva inserta a los movimientos sociales en complejas redes políticas, poniéndolos así al alcance del Estado (Tarrow, 1997).

La noción de oportunidades políticas pone el énfasis en los recursos exteriores al grupo, que pueden ser explotados por los agentes sociales. El planteamiento

¹ Lo presentado en este capítulo se enmarca en el proyecto de investigación PIP-CONICET (2022-2024): “Procesos alternativos de producción y comercialización de alimentos en la Argentina. Actores sociales, políticas estatales y territorios en las primeras décadas del siglo XXI”, dirigido por la Dra. Paula Rosa.

principal de esta perspectiva es que las personas se suman a los movimientos sociales como respuesta a las oportunidades políticas, y a continuación crean otras nuevas a través de la acción colectiva. Es decir, que los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por líderes, responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y demuestran en qué son vulnerables las élites y las autoridades (Tarrow, 1997). Como resultado, el “cuándo” de la puesta en marcha del movimiento social explica en gran medida el “por qué” de su surgimiento. Según Tarrow (1997), la noción de oportunidades políticas aporta también a explicar cómo se difunden los movimientos, cómo se extiende la acción colectiva y cómo se forman nuevas redes, que se tienden de un grupo social a otro creando las oportunidades. Aunque sólo sea eso, “los movimientos enuncian sus exigencias en términos de marcos de significado que resultan comprensibles para un sector más amplio de la sociedad [y] emplean formas de acción colectiva extraídas de un amplio repertorio” (Tarrow, 1997, p. 61).

Los movimientos sociales utilizan repertorios de acción para alcanzar sus objetivos. El repertorio, que es la forma en que actúan colectivamente, “comprende sin duda la manera más concreta mediante la cual estos plasman o buscan sus objetivos, pero además la forma en la cual éstos son vistos y entendidos por los ‘otros’” (Tricot, 2012). Tilly (2002 en Tricot, 2012) al emplear la noción de “repertorio” hace referencia a un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas a través de un proceso de elección relativamente deliberado. Agregando que los repertorios son creaciones culturales, que no descienden de una filosofía abstracta ni toman forma como resultado de la propaganda política, sino que surgen de la lucha (Tilly, 2002, p.8 en Tricot, 2012). En esta dirección, Tricot (2012) sostiene que estas acciones de tipo colectivas responderían a la historia particular de cada grupo, siendo las formas en que estas se llevan a cabo, una expresión mnemónica de este y de su cultura, es decir, las distintas sociedades cuentan con sus propios repertorios de acción colectiva, los cuales pueden variar dependiendo del contexto.

De este modo, la cuestión contextual posee centralidad para comprender la acción colectiva. Álzate Zuluaga (2008) sostiene que esta va “inaugurando nuevos canales de participación, nuevas relaciones entre medios y fines, conforme se van

articulando y reconfigurando las relaciones de poder en el contexto territorial, cultural, económico y político en el que se desenvuelven” (p. 28). Desde la idea de “proceso”, la autora sostiene que las acciones colectivas tienen un ciclo vital que puede conducir a su institucionalización y a ubicar sus relaciones de poder dentro del marco estatal, es decir, que sostiene que el carácter litigante inicial no tiene que ser permanente, este puede estar sólo en algunos momentos de la acción política colectiva. Se plantea así la pluralidad de aspectos presentes en la acción colectiva y la forma en la que estos aspectos se sostienen en el tiempo, varían o se van incorporando a nuevas realidades, en un proceso permanente de autoconstrucción y resignificación del actor social (Álzate Zuluaga, 2008).

Según Oyarce Pizarro (2021) los repertorios son procesos relacionales, conflictuales y de ejercicio del derecho, por lo que tienen una fuerte relación con el Estado. Los movimientos sociales han desarrollado repertorios propios de acción colectiva a partir de la redefinición del papel del Estado y las agencias de mando globales. En este sentido, el autor, siguiendo a Oslender (2002), sostiene que “el espacio no solo es terreno de dominio por parte del Estado a través de la administración, orden y control, sino que es relacional, dinámica y fluida entre lo local y lo global, lo individual y lo colectivo, lo público y privado, entre la resistencia y la dominación, permitiendo a los movimientos sociales ocupar el espacio para subvertir el poder dominante” (Oslender, 2002 en Oyarce Pizarro, 2021, p.5). De esta forma, “los repertorios crean sentido, es decir, transmiten el sentido de una determinada situación y demuestran situaciones alternativas en relación al discurso, por lo tanto, transmiten el sentir de sus acciones resignificando el hecho social” (D’Angelo, 2014 en Oyarce Pizarro, 2021, p.5).

Según indica Tricot (2012), los movimientos globales actuales han dotado de diversos marcos de significación a los movimientos y han generado una expansión de los repertorios que usaron el espacio público como escenario para la visibilidad de la acción. Estas acciones son más experimentales y lúdicas y hacen uso de recursos novedosos, como la inclusión de métodos digitales que permiten, y buscan mostrar una visión alternativa al sistema político imperante. Según Tricot (2012), una de las principales características de los nuevos repertorios de acción colectiva tiene que ver

con la forma en la que llevan a cabo la acción, dando un vuelco hacia las acciones “no violentas” que permiten enfrentarse al poder sin replicar los patrones opresivos o dinámicas opresoras que ostenta el poder (D’Angelo, 2014). Para Oyarce Pizarro (2021) los nuevos repertorios se caracterizan por su intencionalidad comunicativa, la generación de solidaridades entre actores y una fuerte intervención identitaria. Por lo tanto, estos nuevos formatos de repertorios tienden a apropiarse del espacio con nociones anti-hegemónicas y anti-capitalistas a través del uso del cuerpo en el espacio público.

Particularmente, en la Argentina es posible identificar un amplio campo de análisis en el estudio de los movimientos y organizaciones sociales (De Piero, 2020; Giarracca, 2001; 2007; Gradin, 2013; 2014; Rofman, 2012; Wahren 2012; Zibechi, 2003;). Ello debido, en gran parte, a la emergencia, desarrollo, consolidación y diversidad de estos espacios (movimiento obrero, estudiantil, de derechos humanos, desocupados, ambiental, etc. y los movimientos sociales campesinos y de organizaciones rurales argentinas). Surgieron, especialmente, a partir de la década de 1990 y de manera creciente a partir de la crisis de 2001 con su posterior consolidación como actores políticos relevantes en el campo de los programas sociales. Con amplias diferencias en sus estilos, articulaciones socio-estatales, objetivos y formas de manifestación pública, los movimientos sociales argentinos se constituyeron en actores claves para la construcción de políticas públicas y programas de gobierno, así como también para la disputa de intereses hegemónicos (Rosa y García, 2024). En este sentido, para Natalucci (2011), en la actualidad, los movimientos sociales no surgen como un reemplazo de los partidos políticos o los sindicatos; al contrario, emergen a propósito de la rearticulación de las relaciones entre lo público, lo privado y lo estatal en un espacio multiorganizacional. Para Cross *et al.* (2002), el surgimiento de los movimientos sociales en el siglo XXI se trata de una repolitización que instituye sentidos de pertenencia y proyectos colectivos entrelazados alrededor de la centralidad del trabajo en nuestra sociedad (Cross *et al.*, 2002).

La UST surge en el Departamento de Lavalle en la provincia de Mendoza, a partir de la articulación entre un grupo de familias de trabajadores y trabajadoras rurales, productores y productoras de menor escala y un colectivo de agrónomos y agrónomas recientemente graduados en la Universidad de Cuyo. La organización nace en un contexto social, político y económico complejo como fue el de 2001, atravesado por una profunda crisis socioeconómica. Crisis que devino como consecuencia de los cambios en la estructura productiva que se iniciaron en la década de 1990. El modelo neoliberal implementado por el gobierno de Carlos Menem, desarticuló una estructura productiva heterogénea que caracterizó a las economías regionales desde inicios de 1930, donde pequeñas familias productoras podían obtener subsistencia estable y en ascenso, más allá de la hegemonía de los grandes productores que dominaban el mercado; muchas de ellas, con el trabajo de años lograron expandirse y generar trabajo estacional –o llamado golondrina– y agregar valor con derivados de la propia actividad primaria (Rofman, 2012). Para entonces, la producción hortícola y la vitivinicultura mendocina respondía a las necesidades del mercado interno que crecía acompañando el ascenso social de trabajadores urbanos y rurales. La apertura de las importaciones de alimentos y derivados producidos en el país, para abaratar precios en una competencia imposible de sostener frente a la escasa tecnología y logística, inició un proceso de abandono de fincas de los tradicionales productores y acopiadores. Desde entonces, con alta tecnificación en la producción de alimentos y derivados, y con el ascenso de un nuevo actor en el marco de la estructura productiva –las empresas transnacionales– que buscaba obtener beneficios de los agronegocios a partir de la conformación de un modelo de mercado exportador, de explotación intensiva mono-productiva y altamente tecnificada; se fue expulsando a las pequeñas y medianas familias productoras en los primeros años de la década de 2000 (Rofman, 2012). Como señala Giarraca *et al.* (2003) “las nuevas condiciones para la agricultura deshabilitaban la integración de la pequeña y mediana explotación agraria que había caracterizado a la agricultura argentina durante todo el siglo XX. Desaparecían pequeños productores, los medianos se endeudaban y corrían el riesgo de perder sus tierras” (p. 105).

Particularmente, en Mendoza, desde la década de 1990, se produce una reestructuración en la vitivinicultura por un proceso de reconversión y globalización, lo

que fue generando una nueva configuración de las relaciones y del campo de fuerzas entre los actores y los territorios (Altschuler, 2017). La reconversión vitivinícola alentó en Cuyo, la salida masiva de familias productoras a contramano de su voluntad, pues las tierras periféricas a la zona de riego resultaban atractivas para la implementación de servicios gourmet, lugares de esparcimiento y nuevas urbanizaciones entre otras, en detrimento de su origen productivo. En este escenario, marcado por la apertura económica y la desregulación, las familias pequeñas productoras se redujeron significativamente² o permanecieron bajo una economía de subsistencia y trabajos temporarios en espacios periféricos de la producción hegemónica, perdiendo sus tierras endeudadas por falta de pago del servicio de acequias y, las nuevas generaciones, migrando hacia periferias urbanas (Rofman, 2012). En este contexto, las imágenes agrarias eran representadas por “pequeños y medianos productores arrinconados, campesinos expulsados por nuevos inversores, trabajadores rurales y semi-urbanos de pequeños poblados desocupados” (Giarraca *et al.*, 2003, p. 105).

Como señala la referente de la organización entrevistada, los primeros encuentros entre los productores, productoras, campesinos, campesinas y agrónomos y agrónomas, tenían el objetivo de buscar soluciones a la acuciante realidad cotidiana en el contexto de una profunda crisis a partir de generar acciones y estrategias que les permitieran sobrevivir y lograr su permanencia –y el de su familia– en el territorio. Desde lo productivo, inicialmente, comenzaron con la recolección del tomate a partir de la recolección de las plantas con frutos no extraídos y abandonados que se cultivaban en las grandes fincas de medianos y grandes productores tecnificados tras la cosecha gruesa. Con el paso del tiempo y su afianzamiento como organización territorial, la producción que, inicialmente era para autoconsumo, se expandió logrando el fortalecimiento de los emprendimientos de elaboración y comercialización de conservas, así como también lograron diversificar lo producido³. Como parte de su

² Según los datos recopilados por el Censo Agropecuario Nacional (2018), si al inicio del milenio habían poco más de 333 mil explotaciones, en 2018 se registró un veinticinco por ciento menos, casi 251 mil. En términos de población, la pérdida fue de un 40% entre 2002 y 2018.

³ Desarrollan conservas (cerezas, duraznos) realizadas sin químicos, ni conservantes. Asimismo, producen alpargatas de cuero curtido por una fábrica recuperada y latas de tomate triturado y entero elaborado en tres fábricas colectivas Producen vino artesanal, poseen huertas comunitarias, realizan apicultura, cría de animales de granjas y promueven la producción agroecológica de alimentos (UST, 2023).

crecimiento, se puede identificar la expansión de lugares de comercialización ya que consiguieron instalar diferentes puntos de venta en ferias y mercados y además vender a través de su sitio web con la recepción de pedidos. Asimismo, en 2021 contaban con un almacén propio en la ciudad de Mendoza⁴ (la ilustración 1 muestra la inauguración del almacén). En la actualidad, la UST está compuesta por unas 1000 familias distribuidas por toda la región, es decir, es una organización de segundo grado nucleada en cuatro espacios regionales: Oeste (Jocolí), Este (Los Moluches), Valle de Uco y Sur (San Rafael).

Ilustración 1. Inauguración del Almacén Campesino en Mendoza



Fuente: Diario Zona Crítica Cuyo, 2021.

En cuanto a su modalidad organizativa, la UST está conformada por cooperativas de trabajo impulsadas bajo los preceptos de la soberanía alimentaria y el comercio justo. La toma de decisiones es horizontal en donde las discusiones de los grupos de base se trasladan a las reuniones generales a través de delegados rotativos para poder coordinar acciones (Documento UST y Universidad Nacional de Cuyo, 2016). A su vez, cada grupo de base posee delegados en las diferentes áreas operativas: Salud, Formación y Educación, Territorio, Agua y DDHH, Producción y Comercialización y Comunicación. Dentro de sus lineamientos centrales sostienen que la transmisión de conocimientos resulta clave como parte de los recursos de los que

⁴ En el almacén campesino se pueden obtener verduras y frutas, conservas, quesos, lácteos, carnes y productos orgánicos y sin agroquímicos directo de los productores campesinos y sin intermediarios.

disponen. Por ello, gestionan la formación y capacitación de las familias productoras sobre derechos humanos, derecho a la tierra y al agua, salud, género, soberanía alimentaria, reforma agraria y el comercio justo a través de diferentes formatos. Por ello, conformaron la Escuela Campesina de Agroecología entre 2009 y 2010. En 2016, surgió la Tecnicatura Superior en Economía Social y Desarrollo Local; en 2018, avanzó la propuesta del Profesorado de Maestros Rurales, la Tecnicatura Superior en Agronomía, con orientación agroecológica; en 2020, la diplomatura en Agroecología y Manejo Sostenible del Territorio y una Escuela Popular de Género. También llevan adelante radios comunitarias y dos revistas: Grito Cuyano y Revista del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).

Como parte de su accionar, desarrollan diferentes repertorios de acción con el objetivo de visibilizar las dificultades económicas que atraviesa la provincia y en particular las familias pequeñas productoras⁵. Con este fin, llevan a cabo acciones directas como son las protestas y manifestaciones en la vía pública. Entre estas, se encuentra la organización de “verdurazos”, actividad en la que entregan bolsones de frutas y verduras a bajo precio, esta acción la desarrollaron en la explanada de la Casa de Gobierno con el fin de denunciar los altos precios de los alimentos o bien en diferentes plazas para visibilizar su situación como sector. Otra de estas acciones, fue la protesta realizada al gobernador en una festividad provincial con alto reconocimiento público y convocatoria como es la tradicional Fiesta de la Ganadería. En este encuentro, en mayo de 2017, exigieron medidas concretas para la ganadería campesina y la agricultura familiar como así también el fin de los desalojos⁶ a las familias productoras y el acceso a la propiedad de la tierra. Dentro de las acciones desplegadas en ese acto, hicieron entrega de un petitorio en el cual establecieron los puntos centrales de su

⁵ De acuerdo a las cifras otorgadas por el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios del SENASA, la provincia de Mendoza figura como la primera en cantidad de emprendimientos agrícolas familiares a finales de 2021. Se trata de 8.025 unidades productivas, de las cuales se dedican a agricultura unas 5.120 (63,80%), a la ganadería 2.688 (33,50%) y a ambos rubros 217 -2,70%- (Manini, Mauricio, 29/02/2022).

⁶ Por la revalorización que atraviesa la tierra en los últimos años, en la zona hay muchos conflictos; problemáticas puntuales entre las pequeñas familias productoras y empresas, en muchos casos extranjeras, por intentos de desalojos de las fincas, la persecución a las familias, la destrucción de los puestos de cuidado de los animales, los alambrados de parcelas, la rotura de las instalaciones (maquinaria, galpones), los cercamientos ilegales, las intimidaciones a las familias con amenazas y golpes, etc. En muchos casos, las familias trabajan en la finca desde hace décadas, pero como no poseen título de propiedad se vuelven más vulnerables a la persecución y al desalojo (Rosa y García, 2024).

reclamo. Asimismo, como en la provincia de Mendoza el acceso a la tierra y al agua es un tema extremadamente complejo y acuciante dado que resultan bienes escasos⁷, llevan a cabo acciones específicas vinculadas al “acceso a la tierra y al agua para vivir, para consumir y para producir” (UST, 2023). Este tipo de reclamos resultan centrales para la organización desde su origen. En diciembre de 2002, la UST organizó su primera movilización contra la concentración de la tierra y por el acceso al agua. Esta manifestación se convirtió en el hito de conformación de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra dado que generó su reconocimiento público en torno a su lucha, especialmente porque allí por primera vez se conoció su identidad común como colectivo. Desde ese momento, este aspecto de la organización ha cobrado cada vez mayor centralidad debido a la expansión del agronegocio, la instalación de proyectos de megaminería y del turismo transnacional, cuestiones que han profundizado en los últimos años los conflictos sociales y territoriales (Collado Mazzeo y Ramírez, 2020).

En este escenario, las demandas del área de protección y defensa de la tierra y el agua resulta la más combativa, con mayor visibilidad por su despliegue de acciones de tipo contencioso. Por esta razón, una de las referentes señala, en una nota periodística (Moro, 2012), que a esta área de la organización la denominan de la resistencia pues implica ejercerla ante los desalojos, las expulsiones forzadas de las familias que allí habitan y trabajan y para el reconocimiento de la posesión de las familias campesinas. Desde el área, también se llevan a cabo otras acciones junto a las familias productoras. Se las acompaña en situaciones de resistencia a los desalojos en las propias fincas y también se llevan a cabo acciones más institucionalizadas como es el acompañamiento a las familias por los equipos jurídicos de la organización. Estos actúan ante las demandas por deudas y acciones de desalojo de las fincas por falta del título de propiedad. La siguiente ilustración muestra un “verdurazo” en Mendoza, convocado por la UTS, a propósito del mes de las Luchas Campesinas.

⁷ En Mendoza se estima que con los actuales sistemas de riego sólo es posible regar el 3% del territorio. Esta zona es la que queda sujeta a riego y se denomina oasis, mientras que el 97% restante es el secano. También es un problema la escasez de agua para consumo humano y producción, a pesar de que la ley de aguas pone el consumo de agua de las poblaciones como primera prioridad para, su uso los pobladores de la zona del secano no tienen acceso ni siquiera para el consumo humano (Cano, María Eugenia 26/06/2006).

Ilustración 2. “Verdurazo” en Mendoza convocado por la UTS



Fuente: Revista Internos, 2022.

Entramado de alianzas

Como parte de su estrategia y movilización de recursos, desde la UST priorizan establecer vínculos con diversos actores, movimientos sociales e instituciones públicas en la búsqueda de llevar adelante acciones conjuntas, contar con mayor respaldo y expansión de la organización. Por ello, en 2005, la UST conformó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), junto a más de 20.000 familias que se articulaban en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Red Puna y Quebrada de Jujuy, la organización GIROS de Santa Fe, el Servicio a la Cultura Popular (Sercupo) de Buenos Aires y el Encuentro Calchaquí de Salta. Asimismo, articulan con la Federación de Cooperativas la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), organización de amplio crecimiento en los últimos años, que nuclea a familias pequeñas productoras y campesinas de todo el país (Agencia Tierra Viva, 05/2022). En un plano mayor, la organización también se vincula con Vía Campesina, instancia que coordina internacionalmente a organizaciones campesinas de 40 países de África, Asia, América y Europa. A partir de las redes que fueron conformando, extendieron su cobertura, reconocimiento social y político, como así también, al sumarse mayor cantidad de familias productoras como integrantes, lograron un crecimiento como organización.

Asimismo, como parte de sus estrategias se identifican como centrales las articulaciones que poseen con organismos del Estado Nacional orientados a la promoción de la economía social, el desarrollo rural y la agricultura familiar, específicamente. Según una de las referentes, la articulación se inicia desde el 2003⁸ cuándo, de manera continuada, han podido gestionar su participación en diferentes programas y organismos públicos. Entre las principales alianzas construidas cabe mencionar los acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, CONAMI y el Programa Manos a la Obra, el Ministerio de Industria de la Nación, el Ministerio de Agricultura de la Nación, la Secretaría de Agricultura Familiar sede Mendoza, el Programa FOMECA-AFCA, Secretaría de Comunicaciones de la República Argentina, el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación de la Nación, entre otros. La referente reconoce el cambio en cuanto a la oportunidad de apertura política en comparación con las dificultades que atravesaron al inicio, cuando desde la estructura estatal no eran tenidos en cuenta y los programas e iniciativas estatales que los podían tener como sujetos de políticas eran escasos. En este sentido, afirma que en sus inicios como organización “no existía ni en el INTA, ni en la Secretaría de Agricultura Familiar, para ese sector no había nada o había muy poco”. En la actualidad, si bien reconocen mayor apertura a partir de ámbitos para el diálogo y la articulación, la referente identifica que al Estado “le tenés que mostrar un modelo alternativo, (...) tenemos como desafío, también, el dialogar con el Estado, de transformar el Estado, o sea, hacerle propuestas o de participar” (entrevista 01/08/2022).

Las alianzas con organismos públicos han resultado un pilar fundamental del proyecto, ya que –con gestiones de gobierno más afines, a diferencia de la relación que poseen con el gobierno provincial– lograron recursos, capacitaciones y asistencia

⁸ Tras dos años de inestabilidad política, en 2003 asume la presidencia Néstor Kirchner con un apenas 22% de los votos y la negativa del candidato Carlos Menem a ir a ballotage. La debilidad política fue superada por su estrategia de transversalidad con otros sectores políticos afines y emprendiendo una firme política de institucionalizar a las expresiones sociales surgidas de la crisis para incorporarlos a políticas gubernamentales de subsidios y generación de empleo, otorgar personería jurídica a los movimientos espontáneos de la sociedad civil y matricularlos en cooperativas de trabajo ante el INAES (García, 2018). Las políticas sociales del gobierno apostaron a la recuperación de la inclusión mediante el trabajo y otorgando líneas de subsidios, de crédito y capacitación. Para dichos fines, era necesario que los grupos colectivos cobren vida en cooperativas formales de trabajo, sean actores reconocidos por el Estado –matriculándose en el INAES– y sujetos formales para que el mismo pueda transferir su apoyo como venía sucediendo con las empresas recuperadas y la declaración de bien público de su actividad productiva y obtener ayudas en el proceso de quiebra.

técnica a gran escala. Por ejemplo, en la actualidad, articulan con el Estado Nacional a partir del desarrollo de cursos bajo el modelo de “campesino a campesino”, seminarios, talleres y campañas de semillas nativas hasta las escuelas e institutos de formación en agroecología. Por otra parte, a partir de las redes construidas lograron articulaciones con organismos internacionales y con la agencia de cooperación de diferentes países. A partir de estas vinculaciones, junto a subsidios estatales, y los ingresos propios, logran obtener los recursos para sostenerse.

Como parte de sus estrategias, vinculadas a la movilización de recursos externos al grupo, la UST ha emprendido diversidad de acciones vinculadas a la presentación de leyes y la generación de espacios de incidencia para la creación de programas y políticas públicas. A nivel nacional la UST, junto a otros movimientos, desarrollaron y presentaron una serie de proyectos de Ley en el Congreso de la Nación tendientes a democratizar el acceso a la tierra y a la producción de alimentos para la población; iniciativas gestadas en asambleas regionales/nacionales o en encuentros de discusión con diferentes sectores del agro, pequeños y medianos productores, arrendatarios y propietarios, comunidades campesinas e indígenas y población urbana empobrecida sin tierra. Han logrado ciertos apoyos estratégicos para la presentación de proyectos centrales vinculados a su propuesta integral. Como señala Jasinski *et al.* (2022) los proyectos logran ser acompañados por las fuerzas políticas que cubren buena parte del arco político e ideológico conocido, entre la derecha y la izquierda, entre el progresismo y el conservadurismo, entre el oficialismo y la oposición. Es que, según indican, pese a estas diferencias, estas fuerzas comparten una preocupación sobre la creciente concentración de la propiedad y gestión de la tierra y la expulsión de familias rurales.

Junto con la UTT, han presentado iniciativas ante el parlamento nacional como el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra –obteniendo media sanción en Diputados en 2021– el cual plantea crear una línea de créditos blandos para que las cooperativas o el pequeño productor familiar pueda comprar la tierra sobre la que trabaja, permitiéndole mejorar la escala de producción y generar procesos de recuperación y regeneración del suelo de manera sostenida. Además, la UST acompañó, en 2020, un proyecto de Ley para la creación del Programa Nacional Marcha al Campo, que

otorgaría al Estado el rol rector de una distribución de tierras fiscales para la producción y arraigo rural, unos 12 millones de hectáreas fiscales en zonas rurales de todo el país, según lo expresado en el mismo. El proyecto no se propone entregar las tierras en propiedad –ni siquiera colectiva– sino en carácter de comodato a largo plazo, manteniendo el Estado “la nuda propiedad del dominio fiscal, descartando su transmisión al dominio privado” (Proyecto de Ley Marcha al campo, 2020).

Asimismo, en articulación con otras organizaciones con las cuales poseen alianzas, impulsan un proyecto de ley para la protección de tierras para la producción de alimentos, como espacios verdes y para la generación de viviendas para las familias productoras. El proyecto de Ley de acceso al hábitat y el suelo Programa Nacional Tierra, Techo y Trabajo, presentado en octubre de 2022 por la UST junto a la gran mayoría de movimientos campesinos, rurales y de pequeños y medianos productores, se propone instrumentar políticas de acceso a la tierra que prioricen la agricultura familiar, campesina y originaria, comenzando por la población registrada en el RENAF generando, de esta forma, arraigo y fomento para las economías regionales.

Con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación llevaron adelante varios proyectos que tienen que ver con la producción y comercialización de alimentos. Uno de estos es el programa Sembrar Soberanía Alimentaria, centrado en apoyar la producción, elaboración y distribución de alimentos de la agricultura familiar; potenciando las redes locales de abastecimiento en todo el país y dirigido a grupos de productores y comercializadores que formen parte de redes locales de abastecimiento local/ regional de alimentos. A través de este programa, la UST pudo incorporar maquinarias de uso y mejorar la comercialización. Asimismo, otro de los programas estatales con los cuales poseen vinculaciones es con la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que impulsa la entrega de microcréditos como parte de un sistema de finanzas solidarias.

Reflexiones Finales

La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra es una organización que busca que las familias pequeñas productoras puedan continuar produciendo y viviendo en sus propios territorios. Su disputa central es por el acceso a las tierras y al agua para vivir y

producir. Para lograr su sostenibilidad como organización y la de centenares de familias campesinas debieron desplegar diversas estrategias, alianzas y acciones a través de los años.

A partir de lo analizado, es posible identificar el escenario de oportunidades políticas que se abren en el país a partir de 2003 con la llegada de un nuevo gobierno luego de varios años de crisis económica y política. Este escenario cambia las reglas de juego y fueron los movimientos sociales y organizaciones –luego de años de lucha y organización– las que pudieron encontrar las “condiciones de posibilidad” para su acceso al poder. Luego de esta instancia fundacional de oportunidad y apertura su consolidación y extensión se logra a partir de la conformación de redes con otros movimientos y organizaciones, con los cuales comparten marcos de significado, y con la consolidación de su accionar en términos de “repertorios de acción” para alcanzar sus objetivos.

Principalmente, parte de su estrategia podría identificarse con el logro de matices en cuanto a su repertorio de acción en función de los contextos sociales y políticos que fueron atravesando desde su conformación en 2001. Lograron repertorios de acciones más institucionalizados vinculados al accionar legislativo y la conformación de grupos de abogados para la asistencia a las familias productoras, este tipo de accionar se identifica como de tipo propositivo de la organización entrelazado con las oportunidades políticas; otras acciones más directas, confrontativas y territoriales vinculadas a la organización de movilizaciones, marchas y otras formas de protesta y manifestaciones públicas y resistencias a los desalojos en las fincas junto a las familias productoras y un tercer grupo de acciones –que le dan sustentabilidad a sus objetivos– que se vincula a su forma organizativa que es la producción y comercialización de alimentos. En este punto desde la organización se despliegan acciones para fortalecerse como un actor que produce y comercializa productos agroecológicos. Este proceso se ve acompañado por la generación de espacios de formación con escuela agroecológica, su expansión en tecnicaturas, en la generación de talleres y charlas para diferentes públicos y en el acompañamiento técnico a la producción campesina. Así como también en el desarrollo de canales propios de comercialización, como es la creación de su propio almacén.

En todos los casos se evidencia la conformación de redes y alianzas estratégicas para su consolidación como colectivo, para fortalecer la producción y comercialización alternativa y para poder posicionarse como un actor relevante y, a la vez, llevar a otras escalas los principios que fomenta la organización, aspectos que están en estrecha relación. Todo esto fue logrado a partir de la movilización de recursos y el despliegue de acciones en diferentes escalas –más propositivas, institucionalizadas, confrontativas y organizativas– y teniendo en consideración las oportunidades políticas que se van gestando a lo largo del tiempo. En este sentido, es posible visibilizar la activación de diversos recursos, que fueron explotados para su fortalecimiento, parte de estos recursos fueron las alianzas con otros movimientos y con el Estado nacional logrando instancias participativas y espacios de incidencia como actores referentes en el campo de la economía social, la soberanía alimentaria y la agricultura familiar.

Referencias bibliográficas

- Altschuler, B. (2017). Asimetrías y fronteras sociales en la configuración de la vitivinicultura mendocina. *Revista de Estudios Sociales Contemporáneos*, 16, 81-109. Universidad Nacional de Cuyo
- Álzate Zuluaga, M. L. (2008). Esbozo teórico de la acción política colectiva. Experiencias colectivas alternativas frente a las relaciones hegemónicas de dominación *Investigación & Desarrollo*, 16(2), 278-303
- Collado Mazzeo, P. y Ramírez, M. (2020). Conflicto laboral y configuración regional del empleo en Mendoza (2011-2019): Propuesta de interpretación. *Revista Población & Sociedad*, 27, 134-163. Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa.
- Cross, C.; Lenguita, P. y Wilkis, A. (2002). Piqueteros: de la exclusión a la revitalización del conflicto social en Osvaldo Battistini (Coord), *La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada*. (pp. 59-84). Asociación Trabajo y Sociedad, Buenos Aires.
- D'Angelo, V. (2014). El carnaval como conter-performance. Una lectura de la acción simbólica de los más nuevos movimientos sociales. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 44, 45-62

De Piero, S. (2020) *Organizaciones de la sociedad civil: tensiones de una agenda en construcción*. Universidad Nacional Arturo Jauretche, Florencio Varela.

Documento Seminario Economía Popular y Soberanía Alimentaria UST-UNCuyo (2016)

Disponible en: <https://www.uncuyo.edu.ar/articulacionsocial/economia-popular-y-soberania-alimentaria-tema-de-seminario-en-la-uncuyo>

García, I. L. (2018). Cooperativas de trabajo generadas por el Estado Un No a transformar en Sí. *Revista Ciencias Sociales - Segunda Época*, 33, 81-97. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.

Giarracca, N. (2007). Organización y acción colectiva. El caso de la UTD de Mosconi, Salta en Ernesto Villanueva y Astor Massetti (Comps.) *Movimientos sociales y acción colectiva en la Argentina de hoy*. (pp. 166-189). Prometeo, Buenos Aires.

—; et al. (2003). *Los movimientos sociales y la protesta en Argentina La protesta agrorural en la Argentina*. CLACSO, Argentina.

Gradin, A. (2014). Estado y mediaciones sociales: el estilo de gestión del movimiento de desocupados Barrios de Pie en el territorio (Argentina 2002-2011). *Revista Estudios*, 32, 49-78.

—. (2013) El proceso de integración política de los Movimientos de Desocupados a la gestión del Estado en la Argentina kirchnerista: un análisis del estilo de gestión de los Programas Promotores Territoriales para el cambio Social y de Fortalecimiento y Participación de las Mujeres Juana Azurduy durante el periodo 2003-2009. [Tesis de Maestría] Repositorio FLACSO Argentina.

Inclán Oseguera, M. de la L. y Muñoz Gil, I. (2017). A la sombra de Sidney Tarrow: Conceptos básicos para el estudio de los movimientos de protesta. *Política y gobierno*, 24(1), 189-212.

Jasinski, A.; Caggiano, J.; Sommer, I. y Oberlin, M. (2022). *Ensayo histórico sobre el acceso a la tierra en Argentina*. The tricontinental.org. Noviembre. Disponible en: <https://thetricontinental.org/es/argentina/tierracuaderno1/>

Jiménez Solares, C. (2007). Acción colectiva y movimientos sociales. Nuevos enfoques teóricos y metodológicos. [Ponencia] XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara.

Proyecto de Ley de acceso al hábitat y el suelo “Programa Nacional Tierra Techo y Trabajo”. (2022)

<https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2022/PDF2022/TP2022/3134-D-2022.pdf>

Proyecto de Ley Marcha al Campo (2020)
www.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/3905-D-2020.pdf

Oslender, U. (2002). Espacio, lugar y movimientos sociales hacia una "espacialidad de resistencia". *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 6, 105-132.

Oyarce Pizarro, J. (2021). (Re)Construcción de la realidad y protesta: Un análisis de los repertorios de acción colectiva desde la teoría de las representaciones sociales, *Anuario del Conflicto Social*, 12, e-36262

Rofman, A. (2012). *Las economías regionales. Luces y sombras en un ciclo de grandes transformaciones: 1995-2007*. Universidad Nacional de Quilmes y Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires.

Rosa, P. y García, I. L. (2024). Estrategias organizativas y luchas en un territorio disputado. *Revista Miríadas. Investigación en Ciencias Sociales*, 16(20) (En prensa).

Svampa, M. (2009). *Protesta, Movimientos Sociales y Dimensiones de la acción colectiva en América Latina*. Ensayo.
<http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo57.pdf>

Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza Editorial, S. A., Madrid.

Tilly, Ch. (1978). *From Mobilization to Revolution*. Reading, Mass. Addison-Wesley Publishing Co.

Tricot, V. (2012). Movimiento de estudiantes en Chile: Repertorios de acción colectiva ¿algo nuevo? *Revista F@ro*, 15, 1-14. Valparaíso, Chile

Wahren, J. (2012). Movimientos Sociales y territorios en disputa. Experiencias de trabajo y autonomía de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, Salta. *Revista Trabajo y Sociedad*, 19, 133-147.

Zibechi, R. (2003). *Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos*. *Observatorio Social de América Latina*, 9, CLACSO, Buenos Aires.

Fuentes periodísticas

Agroecología (05/12/2022) Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra, 20 años de lucha campesina en Cuyo. *Agencia de Noticias Tierra Viva*.
<https://agenciatierroviva.com.ar/union-de-trabajadores-rurales-sin-tierra-20-anos-de-lucha-campesina-en-cuyo/>

Agroindustria (23/04/2021) Inauguro el Almacén Campesino en Mendoza. *Zona Crítica Cuyo*. <https://zonacriticacuyo.com/inauguro-el-almacen-campesino-en-mendoza/>

Cano, María Eugenia (26/06/2006) Argentina: la lucha de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra en Mendoza. *Biodiversidad*.
https://www.biodiversidadla.org/Noticias/Argentina_la_lucha_de_la_Union_de_Trabajadores_Rurales_sin_Tierra_en_Mendoza

Comercialización (20/04/2022) En el mes de las Luchas Campesinas, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra convocó a un verdurazo en Mendoza. *Revista Internos*. <https://www.revistainternos.com.ar/2022/04/en-el-mes-de-las-luchas-campesinas-la-union-de-trabajadores-rurales-sin-tierra-convoco-a-un-verdurazo-en-mendoza/>

Manini, Mauricio (29/02/2022) Agricultura familiar: Mendoza es la provincia con más predios registrados. *Los Andes*.

<https://www.losandes.com.ar/fincas/agricultura-familiar-mendoza-es-la-provincia-con-mas-predios-registrados/>

Moro, Penélope (3/12/2012) Los dueños de la tierra están de festejo. *Unidiversidad*
<https://www.unidiversidad.com.ar/los-duenos-de-la-tierra-celebran-sus-diez-anos-de-lucha>

Revista Internos (2022). En el mes de las Luchas Campesinas, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra convocó a un verdurazo en Mendoza. Recuperado de:
<https://www.revistainternos.com.ar/2022/04/en-el-mes-de-las-luchas-campesinas-la-union-de-trabajadores-rurales-sin-tierra-convoco-a-un-verdurazo-en-mendoza/>

Zona Crítica Cuyo (2021). Inauguró el almacén campesino en Mendoza. Recuperado de:
<https://zonacriticacuyo.com/inauguro-el-almacen-campesino-en-mendoza/>

Participan en esta compilación

Lautaro Alba

Licenciado en Ciencias Ambientales (FAUBA), estudiante de doctorado en Sociología (UNSAM). Ayudante de primera -Cátedra de Extensión y Sociología Rurales- (FAUBA). Becario CONICET en Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET). Correo electrónico: lalba@agro.uba.ar

Milagros Bordalejo

Licenciada en Trabajo Social (UBA). Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Becaria doctoral CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). Correo electrónico: milidalejo@hotmail.com

Carlos Cowan Ros

Ingeniero Agrónomo (UBA), Doctor en Ciencias (UFRRJ). Profesor adjunto de la carrera de Agronomía (UBA), director de la Especialización en Desarrollo Rural (FAUBA). Investigador Independiente del CONICET en el CEUR. Correo electrónico: cowanros@agro.uba.ar

Aldana García Tarsia

Licenciada y Profesora de Enseñanza Media y Superior en Geografía (UBA). Estudiante del doctorado de la Universidad de Buenos Aires área Geografía (UBA). Becaria doctoral CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). Correo electrónico: aldana.garciatarsia@conicet.gov.ar

Inés Liliana García

Licenciada en Sociología (UBA), Magister en Economía Solidaria (UNSAM). Integrante de Carrera Profesional de Apoyo a la investigación (CPA- Cat. Principal) CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). Correo electrónico: ilgarcia@conicet.gov.ar

Ariel García

Licenciado en Geografía (UBA), Magister en Estudios Sociales Agrarios (FLACSO), Doctor en Geografía (UBA). Profesor de las carreras de Trabajo Social y de Geografía (FSoc-UBA y FFyL-UBA) y de posgrado (FA-UBA, FADU-UBA, FyL-UBA, UNSE, UNaM, UNSam, FLACSO, UFF-Brasil). Investigador Independiente CONICET en el CEUR. Correo electrónico: arielgarcia@conicet.gov.ar

Malena Victoria Hopp

Licenciada en Trabajo Social (UBA), Dra. en Ciencias Sociales y Magister en Políticas Sociales (UBA). Profesora de la Carrera de Trabajo Social (UBA). Investigadora CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Correo electrónico: malenavhopp@gmail.com, mhopp@sociales.uba.ar

María Florencia Marcos

Profesora de enseñanza media y superior en Ciencias Antropológicas, área sociocultural (FFyL- UBA), Magister en Políticas Ambientales y Territoriales (FFyL-UBA), Doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Antropología. Docente de la especialización y la maestría en Desarrollo Rural (FAUBA). Becaria posdoctoral de CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Correo electrónico: florenciamarcos@conicet.gov.ar

Ana Natalucci

Licenciada en Comunicación Social (UNC), Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Docente Adjunta a cargo de la materia Teorías de la Acción Colectiva, Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Investigadora Independiente del CONICET en IDAES/UNSAM. Correo electrónico: anatalucci@unsam.edu.ar

Paula Cecilia Rosa

Licenciada y Profesora en Sociología (FSOC-UBA), Doctora en Ciencias Sociales (IDES-UNGS). Profesora de la carrera de Trabajo Social (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Investigadora independiente en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/CONICET.

Sandra Sterling Plazas

Economista y Magister en Economía (PUJ, Bogotá). Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesora de grado en la Facultad de Ingeniería (UNLZ) y de posgrado (FADU-UBA). Becaria doctoral Agencia/FONCYT en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR/CONICET. Correo electrónico: ssterlingp@gmail.com